



SÍNTESIS

DINÁMICAS TERRITORIALES EN CENTROAMÉRICA: CONTEXTO Y DESAFÍOS PARA COMUNIDADES RURALES

Se autoriza la reproducción total o parcial siempre y cuando se cite la fuente.

Diagramación:

Leonor González

Diseño de portada:

Wendy E. Peña

Mapas:

Oscar Díaz



Esta publicación está liberada bajo la licencia de Creative Commons

Reconocimiento-No comercial-Compartir Obras Derivadas Igual.

Para mayor información: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

© **Fundación PRISMA, mayo 2011**

Esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero institucional recibido por PRISMA de parte de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y de la Fundación Ford.



DINÁMICAS TERRITORIALES EN CENTROAMÉRICA:

CONTEXTO Y DESAFÍOS
PARA COMUNIDADES RURALES

Nelson Cuéllar, Susan Kandel y Andrew Davis,
Oscar Díaz, Fausto Luna, Xenia Ortiz



MAYO, 2012

Iniciativa Colaborativa de Diálogo e Investigación sobre Dinámicas Territoriales en Centroamérica

Para contribuir a una mejor comprensión de la nueva territorialidad que está emergiendo en Centroamérica, en mayo de 2006 PRISMA promovió la *Iniciativa Colaborativa de Diálogo e Investigación sobre Dinámicas Territoriales en Centroamérica*. Este esfuerzo busca indagar las distintas fuerzas motoras que están moldeando los territorios y sus encadenamientos en diversas escalas que van desde lo local-territorial, hasta lo nacional, lo regional y lo global. Se intenta contribuir a llenar el vacío de un abordaje territorial en la discusión regional y alimentar diálogos sustantivos sobre pobreza, ambiente y gestión territorial en la región.

Dado que la nueva territorialidad tiene fuertes implicaciones para las estrategias de vida, el manejo de los recursos naturales y las iniciativas de gestión territorial de comunidades rurales, la iniciativa tiene una opción preferencial por generar conocimiento que sea útil para las estrategias de actores territoriales. Por ello, el esfuerzo se basa en acciones de diálogo e investigación para mejorar la capacidad de los actores locales y territoriales, para acumular una masa crítica que debate sobre el desarrollo sostenible en la región, que nutre los esfuerzos de actores sociales y que incide en políticas públicas. Los temas de investigación se definen en el marco de la iniciativa colaborativa, en un proceso abierto que a su vez da lugar a intercambios, al establecimiento de puentes entre diversos actores y a nuevas iniciativas bilaterales. Los diálogos no buscan simplemente proporcionar una lectura actualizada del contexto, sino que también sirven para construir vinculaciones entre actores que incluyen líderes territoriales y gremiales, funcionarios, cooperantes, académicos, ONG y sector privado, que operan en distintas escalas y que comparten diferentes perspectivas, conocimientos y abordajes.

La iniciativa parte de que el territorio es el resultado de procesos socialmente construidos, como resultado de la acción de distintos actores que intervienen e interactúan. Este enfoque lleva a considerar los tres diferentes ámbitos que moldean los territorios: el global, que representa el marco de referencia más macro de las corrientes y tendencias de la globalización; el regional, donde las condiciones particulares (sociales, culturales, económicas, ambientales, políticas, etc.) intermedian en el aterrizaje de la globalización; y el local, que constituye una entrada desde abajo, desde los actores específicos, donde a la dimensión territorial, metodológicamente, también se vincula con las dimensiones histórica y cultural. En este sentido, la iniciativa trata de establecer vinculaciones temáticas de las dinámicas territoriales en función del contexto que dan lugar a respuestas que van desde nuevas disputas, hasta nuevas oportunidades que fortalezcan alternativas de desarrollo en la región.

La iniciativa ha adoptado tres enfoques para abordar las dinámicas territoriales en Centroamérica: la economía política, para contribuir a entender los nuevos procesos de transformación y cambio económico en la región; la ecología política, que trata de profundizar en las relaciones de poder subyacentes en el manejo de los recursos naturales y de la gestión territorial; y el enfoque desde los actores territoriales para entender mejor y para aprender de las diversas respuestas que surgen en los territorios, ya sea desde una lógica de inserción, de resistencia o de innovación frente a las dinámicas territoriales.

Contenido

Introducción: La importancia de entender las dinámicas territoriales en Centroamérica	1
El territorio de Petén, Guatemala	3
La franja Transversal del Norte de Guatemala	6
El territorio de la Mosquitia hondureña	9
La Zona Norte de El Salvador	12
La región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua	15
El norte de Costa Rica y sur de Nicaragua	18
Implicaciones para la gobernanza y la gestión territorial	21
Bibliografía	25

Introducción:

Importancia de entender las dinámicas territoriales en Centroamérica

Centroamérica se está reconfigurando territorialmente y esto impacta fuertemente en los territorios rurales con claras implicaciones en las estrategias de vida, el manejo de los recursos naturales y las iniciativas de gestión territorial de comunidades rurales. Ese proceso de reconfiguración territorial se da en un contexto de globalización fuertemente marcado por las acciones de importantes actores transnacionalizados, pero, también, por las respuestas de actores territoriales y sociales que desarrollan sus estrategias de vida en una lógica de resistencia, adaptación o innovación a las formas concretas con que la globalización se expresa en sus territorios.

A pesar de ser parte de las grandes transformaciones en la región, las dinámicas territoriales están insuficientemente advertidas y sus impactos e implicaciones ambientales, sociales e institucionales, están poco entendidos.

Las estrategias de superación de la pobreza rural, así como las estrategias de conservación y manejo sostenible de recursos naturales en Centroamérica, a menudo excluyen confrontar las dinámicas territoriales prevalecientes en los territorios. Aunque existen algunos esfuerzos sistemáticos importantes por analizar algunas dinámicas territoriales en la región, todavía prevalecen los estudios nacionales y sectoriales que no informan adecuadamente los marcos de política ó las estrategias de los diversos actores sociales y territoriales.

Los tradicionales diagnósticos que constituyen la base para la formulación e implementación

de programas diversos en territorios rurales, a menudo se limitan a la descripción biofísica, a la descripción de organizaciones o a la identificación de potencialidades productivas para nuevas cadenas productivas, sin embargo, poco contribuyen al entendimiento de las complejidades que subyacen a la emergencia de nuevos conflictos y disputas inherentes a las dinámicas territoriales, especialmente críticas para la situación de derechos, las estrategias de vida y las condiciones de gobernanza de comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Una mirada a los territorios rurales de la región evidencia las generalizadas presiones que se caracterizan por su intensidad y celeridad. Los nuevos patrones de migración y movilidad humana en Centroamérica (internacional e intrarregional), son parte de las enormes transformaciones de la región, que en sólo tres décadas pasó de ser una economía basada en la agroexportación tradicional, hacia una diversificación basada en las remesas como la principal fuente de divisas, pero con agresivas estrategias de diversificación que incluyen nuevos sectores como el turismo, las industrias extractivistas, mega-proyectos de infraestructura y maquila agrícola, entre otros.

Además del cambio económico y la creciente transnacionalización de los grupos económicos, otros actores internacionales tratan de ampliar y consolidar los territorios dedicados a la conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural. El Estado, por su parte, ha apostado a grandes inversiones en infraestructura, como

base para la facilitación de nuevos ejes de acumulación, tal como ocurre con el turismo, las actividades extractivas y los agro-combustibles. Particular preocupación reviste la presencia cada vez más generalizada de actos ilícitos en la región, tales como el tráfico de especies, personas y drogas, agudizando situaciones de violencia e influyendo fuertemente en los desafíos de la gobernanza territorial.

La reciente crisis global (financiera, alimentaria, energética, etc.) agrega un nuevo factor cada vez más volátil y complejo con grandes repercusiones territoriales. Luego del estallido de las burbujas financieras y de las inversiones especulativas, Centroamérica constituye un destino importante para captar nuevas inversiones que en la post-crisis se reflejan en sectores (y territorios) como la minería, el petróleo, los agro-combustibles y el desarrollo inmobiliario asociado con el turismo. En la práctica, esto forma parte de una tendencia global que busca nuevas lógicas de inversión y de acumulación en la esfera real de la economía, en un afán por encontrar una salida a la crisis económica global.

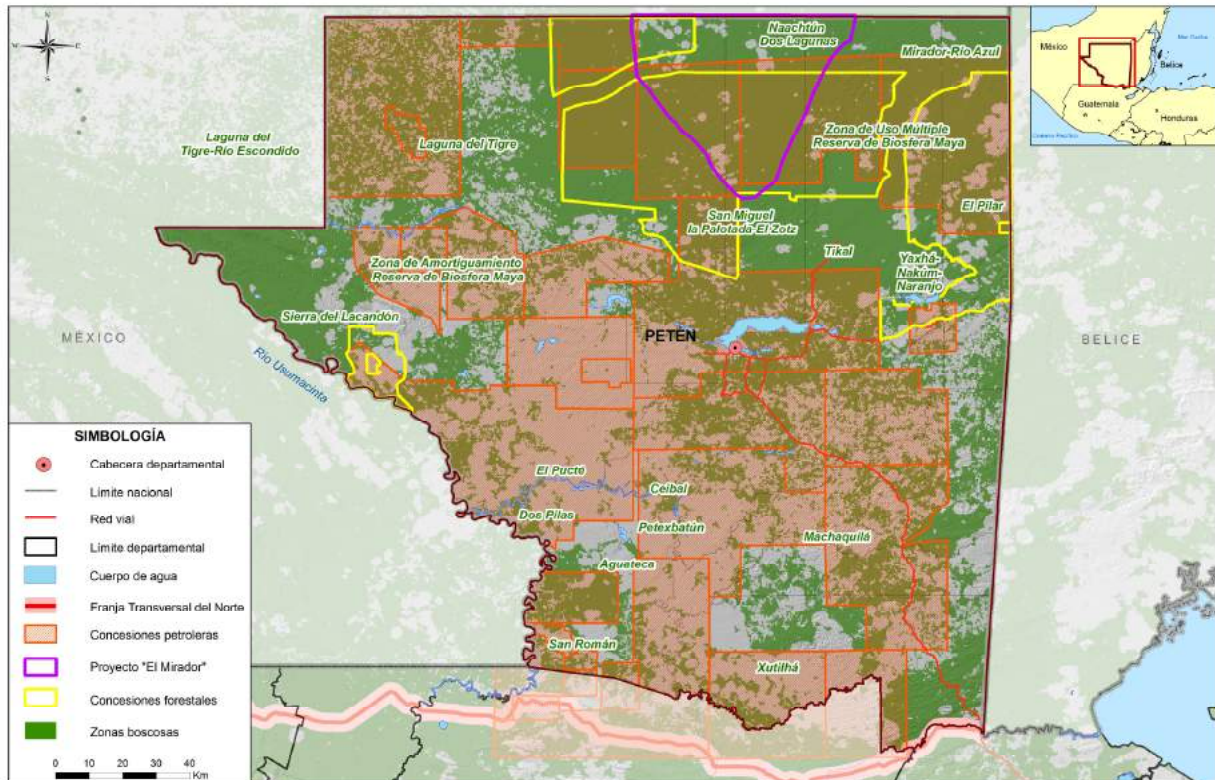
En este contexto de transformaciones en curso, las respuestas a la crisis ambiental global relacionadas con el cambio climático también se convierten en otro elemento que da paso a nuevas disputas territoriales, pues diversos territorios rurales son visualizados para implementar acciones de mitigación del cambio climático. El creciente interés por introducir y masificar el cultivo de agrocombustibles refleja claramente esta tendencia, con fuertes impactos sociales que incluyen procesos de despojo y desplazamiento de comunidades rurales. Desde una perspectiva territorial, las acciones de mitiga-

ción traen consigo un mayor interés en territorios relevantes para nuevas inversiones energéticas (agro-combustibles y represas), así como zonas de bosque por su potencial para vender derechos de carbono. La producción de agro-combustibles pone en riesgo la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que deja de lado los territorios más vulnerables a los efectos del cambio climático. Irónicamente, el mayor interés por los fondos o mercados de carbono se da a costa de una relativamente menor preocupación por desafíos mayores para Centroamérica, que a pesar de ser una de las regiones más vulnerables del mundo, adolece de compromisos y estrategias para la adaptación al cambio climático.

Estos procesos tienen expresiones territoriales concretas y generan contradicciones y disputas territoriales que redimensionan los desafíos para muchas comunidades rurales, que ya presentan severas condiciones de exclusión social, pobreza y degradación, comprometiendo, aún más la viabilidad y sostenibilidad de sus estrategias de vida como resultado de la expresión territorial de las nuevas fuerzas de la globalización.

Este documento ejemplifica distintas dinámicas en territorios de Centroamérica que incluyen Petén y la Franja Transversal del Norte en Guatemala; la zona norte de El Salvador; la Mosquitia en Honduras; la Región Autónoma del Atlántico Norte y parte del departamento de Rivas en Nicaragua; así como parte de la zona norte de Costa Rica. Finalmente se discute de manera sintética algunas de los principales desafíos para las comunidades rurales frente a las dinámicas territoriales.

El territorio de Petén, Guatemala



Fuente: Elaborado por PRISMA en base a Cortave (2009); Monterroso, 2001; USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM 2002.

Hoy en día, las nuevas apuestas y presiones que existen en Petén pueden ser interpretadas como el capítulo más reciente de la historia de un departamento dominado por visiones territoriales impulsadas desde el exterior. La reciente y acelerada transformación de este departamento comenzó a partir de los años cincuenta, cuando los bosques escasamente poblados se fueron deforestando frente al avance de la agricultura, la ganadería, la infraestructura de transporte, el petróleo y la minería. En gran medida esto fue resultado de las políticas de ‘colonización’ que buscaban incorporar al Petén con la estrategia de desarrollo económico nacional, así como brindar una “válvula de escape” para las contradicciones sociales en el resto del país. El rápido deterioro ambiental experimentado durante esta época llevó a una res-

puesta de la comunidad ambiental tanto a nivel nacional, como internacional, que marcó el comienzo de la implementación de la visión conservacionista en Petén, expresada en la creación de la Reserva de Biosfera Maya (RBM) a principios de los años noventa.

La visión conservacionista para Petén se ha ido debilitando en años recientes, debido al continuo deterioro ambiental y al creciente poder factico en varias de las áreas ‘núcleo’ de la RBM, y frente a renovados intereses por el petróleo, el turismo, el carbono y la hidroelectricidad. El petróleo se traslapa fuertemente con áreas forestales, incluyendo la propia RBM y una nueva ronda de licitaciones petroleras ha reflejado el interés de aumentar la extracción de este recurso subterráneo. El interés de convertir

el norte de Petén en un parque de turismo arqueológico y ecológico se ha reactivado en años recientes, con propuestas para el megaproyecto 4-Balam. Asimismo, nuevos intereses asociados a la mitigación del cambio climático también han vuelto su mirada a Petén, en la forma de propuestas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD). Se suman a estas presiones propuestas para una represa sobre el río Usumacinta que colinda con México, lo cual implicaría el desalojo de varias comunidades y la destrucción de considerables extensiones de bosque.

Estas propuestas y visiones para Petén aterrizan en, y en algunos casos se presentan como soluciones para, una situación de ingobernabilidad y conflictividad que predomina en el departamento, donde grupos ilícitos dominan territorios enteros. Asimismo, fuertes patrones de desalojo y migración asociados con la palma africana y la ganadería en el sur de Petén siguen impulsando pueblos hacia áreas protegidas, generando una fuerte conflictividad ambiental.

Dentro de esta situación álgida surge una visión comunitaria para Petén que se ve en constante disputa con las visiones externas del territorio. Las concesiones forestales comunitarias de Petén han logrado atraer la atención nacional e internacional por el manejo forestal comunitario que ha sustentado la fuerte gobernanza de casi medio millón de hectáreas de bosque, así como el fortalecimiento de los medios de vida de sus comunidades. Los derechos de usufructo que lograron ganar en los años noventa, después de ser excluidos en el establecimiento original de la RBM, tienen una duración de 25 años y han brindado la base para una alternativa de desarrollo sostenible para la región.

A pesar de estos importantes avances, las concesiones forestales comunitarias están obligadas

a defender constantemente sus derechos, pues carecen de seguridad jurídica y las continuadas presiones sobre sus territorios han traído conflictos y nuevos dilemas de resistencia o negociación con actores y visiones externas. La migración y la conversión de bosques a parcelas pequeñas agrícolas, o ganadería y palma africana siguen ejerciendo una presión sobre las concesiones, haciendo necesaria una movilización desgastante para las comunidades. Asimismo, han tenido que responder con esfuerzos de incidencia para resistir los impactos que traería la represa sobre el río Usumacinta.

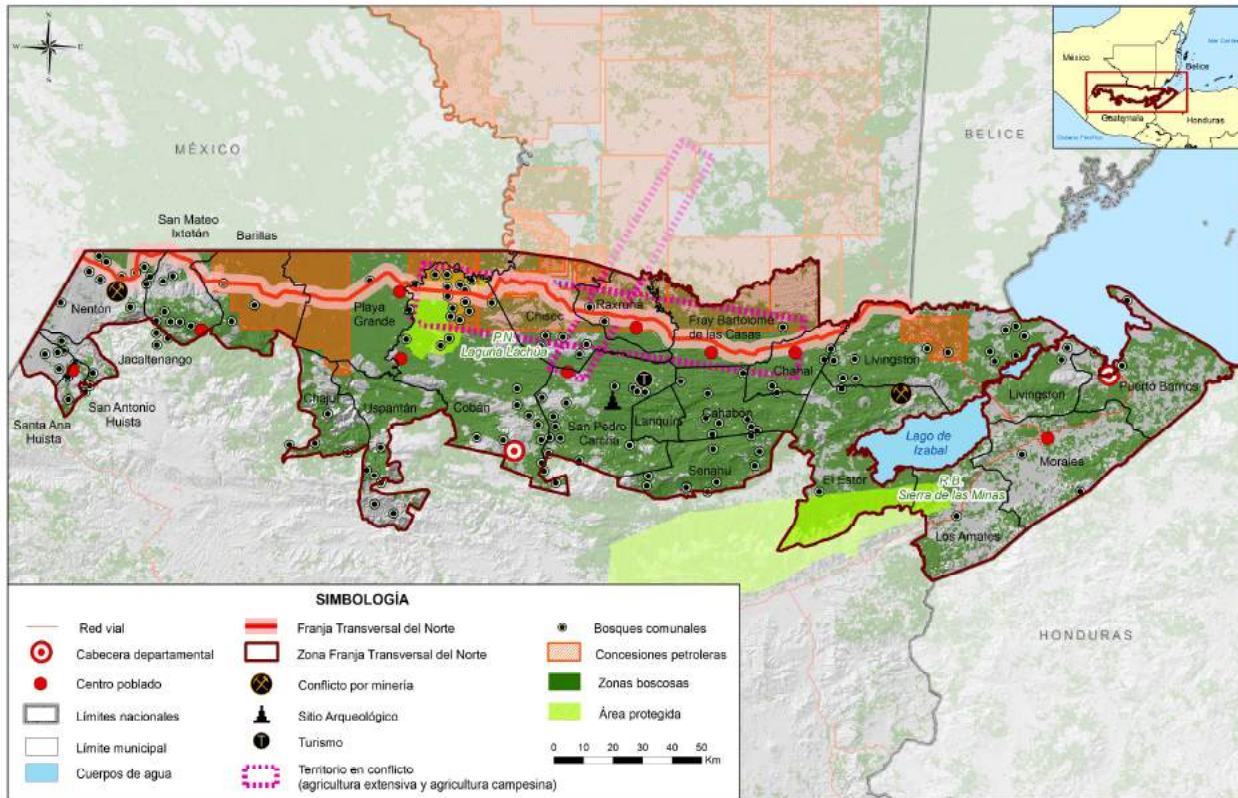
Si bien el petróleo siempre ha sido un factor en Petén, una serie de factores ha elevado su importancia para la región en años recientes. La aprobación del FONPETROL ha debilitado la resistencia a la extracción petrolera en el departamento, pues esta aumenta los ingresos percibidos por las municipalidades y consejos de desarrollo. En 2010, se generó un nuevo conflicto por la prórroga de la concesión petrolera del campo Xan, ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre adyacente a las concesiones forestales. En respuesta a la ingobernabilidad en esta región, así como la fuerte oposición ambiental (inclusive dentro del mismo gobierno) la administración Colom envió fuerzas armadas, los llamados “batallones verdes” con el mandato oficial de establecer presencia estatal en la región y proteger los recursos naturales. Además de su rol devastador en la guerra civil que sigue presente en las memorias de las comunidades rurales de Guatemala, el ejército como institución ha resistido los compromisos de los acuerdos de paz de reducir su influencia política y ha sido penetrado por grupos de narcotráfico. Todo esto indica un futuro de nuevas amenazas y conflictividad para las comunidades forestales de Petén.

Los casos de los mega-proyectos de turismo 4-Balam y REDD presentan una amenaza real para las comunidades, pues podrían involucrar

un cambio en la lógica del manejo del territorio, sus recursos y una redistribución de derechos. Sin embargo, existe todavía una alta indefinición de estas iniciativas, por lo que las concesiones forestales comunitarias se han lanzado agresivamente para incidir en su diseño e implementación, para apalancar el interés en sus recursos a favor de las comunidades. Esto incluye la elaboración de propuestas de turismo rural comunitario, que fortalece y surge a partir de los derechos ganados por las comunidades. En el caso de REDD, las comunidades han utilizado varias estrategias de incidencia. Si bien su participación en un proyecto piloto de REDD ha traído costos y pocos beneficios concretos después de varios años de trabajo, este proyecto, y REDD en general, han brindado una plata-

forma de incidencia, tanto relacionado a los derechos sobre el carbono como a la consolidación y extensión de sus derechos concesionarios. En 2010, las concesiones comunitarias se unieron con comunidades forestales y pueblos indígenas a lo largo de Mesoamérica en la Iniciativa del Reservorio de Carbono Comunitario que brinda una ruta alternativa a las opciones principales de REDD en forma de proyectos pilotos o programas oficiales del Banco Mundial, ONU-REDD y GIZ. Esta iniciativa busca generar apoyo gradual y sostenido para un REDD comunitario que se desarrolle a partir de estrategias endógenas, que fortalezcan las instituciones locales de manejo forestal y promueva las visiones comunitarias para la gestión territorial.

La Franja Transversal del Norte de Guatemala



Fuente: Elaborado por PRISMA en base a SEGEPLAN (2011); Monterroso, 2001; FUNDALUCHA (2010); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM 2002.

La Franja Transversal del Norte (FTN) de Guatemala incluye 23 municipios de los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché e Izabal. En ese territorio se tiene previsto la construcción de una carretera de unos 320 km de longitud que facilitaría el transporte desde la frontera con México hasta la frontera con Belice. Dicho proyecto no es nuevo, pues se promovió desde la década de los setenta del siglo XX, proyecto que, al igual que otras iniciativas existentes desde hace décadas, actualmente coexisten con nuevas propuestas y estrategias para convertir a la FTN en un territorio integrado a nuevos esquemas de uso del suelo, dando como

resultado un proceso generalizado de disputas por el control de los recursos y del territorio.

Desde inicios del siglo XX, la FTN operó como un territorio receptor de población bajo modalidades que incluyeron procesos de colonización, otorgamiento de tierras para la conformación de fincas forestales y otorgamiento de concesiones para enclaves bananeros, entre otros. La colonización se vio truncada cuando en la década de los sesenta del siglo XX se descubrieron importantes yacimientos de petróleo y minerales, a partir de los cuales, ese territorio despertó el interés de las élites económicas, políti-

cas y militares. A partir de ahí, la FTN dejó de ser un territorio visto sólo como válvula de escape a las presiones sociales propias de las rigideces de la estructura agraria y de procesos de expulsión ocasionados por la expansión de cultivos como el café, para también constituir un territorio de interés por su potencial de explotación de sus recursos naturales. De hecho, a partir de los sesenta se promueven procesos de concentración de la propiedad de la tierra, con fuertes impactos sobre las formas de organización y el tejido social que se agudizaron con las estrategias de militarización y tierra arrasada durante el conflicto armado en la década de los ochenta y primeros años de los noventa.

Desde los años noventa, en la FTN se han complejizado las dinámicas pre-existentes. Las estrategias de vida campesinas y las formas tradicionales de los pueblos indígenas están sistemáticamente confrontadas con nuevas propuestas, nuevos intereses y nuevos actores que tienen visiones y apuestas territoriales contrapuestas con las formas tradicionales de uso del territorio. A los intereses por la explotación petrolera y minera del siglo pasado, se agrega una serie de “nuevas potencialidades” que incluyen la acelerada expansión de cultivos intensivos de palma africana y caña de azúcar que forman parte de los nuevos encadenamientos de los emergentes mercados de agrocombustibles; la construcción de presas hidroeléctricas; y el aprovechamiento de la belleza escénica, la riqueza de recursos naturales y arqueológicos para la promoción del turismo, entre otros. En este contexto, el renovado interés por la construcción de la carretera busca apoyar una serie de servicios logísticos que agreguen mayores condiciones de competitividad a estas nuevas actividades económicas en la FTN. A esto hay que agregar las propuestas de expansión de las áreas naturales protegidas y la presencia de actividades ilícitas que configuran un contexto complejo, particularmente para los derechos de las comunidades locales.

Los pueblos indígenas que históricamente han habitado en la FTN, así como las comunidades campesinas conformadas a raíz de las estrategias de poblamiento y colonización tienen una tradición importante de organización comunitaria. En la época de militarización y desarraigo derivado de las acciones de tierra arrasada (finales de los ochenta y principios de la década de los noventa), las comunidades mantuvieron sus esfuerzos de organización comunitaria bajo nuevas modalidades conocidas como Comunidades de Población en Resistencia. En los noventa, el proceso de retorno, se caracterizó por ser un esquema organizado, colectivo y voluntario. A pesar de la fuerte práctica de organización comunitaria, en la FTN estas comunidades enfrentan nuevos desafíos. De hecho los procesos de regularización de la tierra en la FTN buscan dinamizar el mercado de tierras a través del otorgamiento de títulos individuales de propiedad que facilitan la posterior venta, con lo cual también se destruye el tejido social comunitario y deriva en procesos generalizados de reconcentración de la tierra a favor de grandes propietarios.

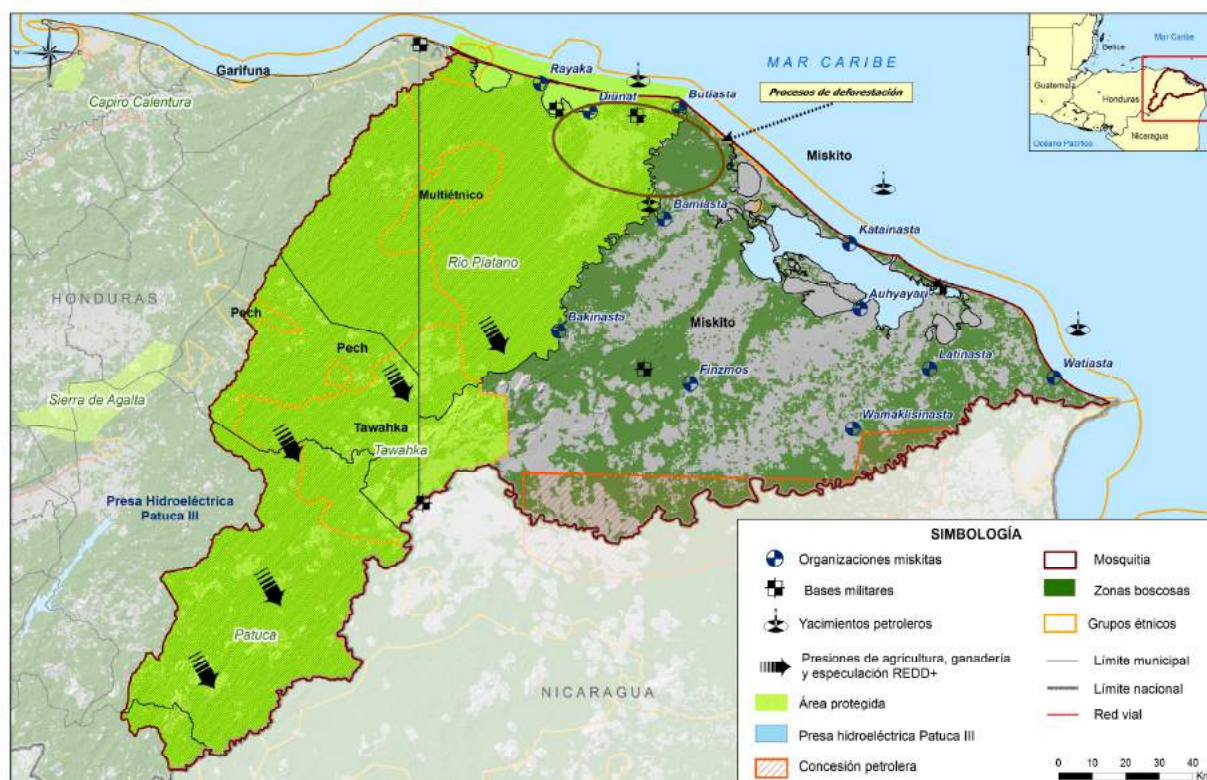
A pesar de las enormes potencialidades por la riqueza de recursos existentes en el territorio, las opciones agrícolas siguen siendo la base de las estrategias de vida de comunidades indígenas y campesinas en la FTN. Sin embargo, hay intentos importantes de diversificación que incluyen la inserción en la promoción del turismo, tal como ocurre en Alta Verapaz y en el sur de Petén, donde organizaciones comunitarias participan en la iniciativa turística “Puerta al Mundo Maya”, organizaciones que a su vez forman parte de la Asociación Gremial de Turismo de Chisec y de la Federación Nacional de Turismo Comunitario de Guatemala. Estas iniciativas todavía enfrentan desafíos propios para el desarrollo de una oferta turística competitiva, equitativa y sostenible, lo cual supone contar

con esquemas de acompañamiento sistemáticos y comprometidos.

Si se consideran otras nuevas potencialidades del territorio, como la eventual venta de bonos de carbono asociados a esquemas de mitigación del cambio climático, proyectos piloto como los desarrollados en el Parque Nacional Laguna Lachuá y en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, ambos en la FTN, fácilmente podrían significar nuevas fuentes de disputa por los derechos sobre los recursos naturales y el terri-

torio. Capacidades técnicas, organizativas y acompañamiento son sólo parte de los desafíos que las comunidades rurales, indígenas y campesinas de la FTN de Guatemala enfrentan frente a las diversas dinámicas territoriales impulsadas por diversos actores. Por el contrario, si se articulan de manera apropiada y se definen compromisos políticos a favor de las comunidades de la FTN, opciones como el turismo ó los bonos de carbono podrían contribuir a fortalecer los derechos y las estrategias de vida de la población en la FTN.

El territorio de La Mosquitia hondureña



Fuente: Elaborado por PRISMA en base a Bendless (2009); Mopawi (2005); Padilla (2009); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM 2002

La Mosquitia hondureña es un territorio marcado por los cambiantes intereses externos y un constante reposicionamiento de actores locales frente a diversas presiones. Las dinámicas territoriales que hoy prevalecen en La Mosquitia tuvieron su inicio en los años ochenta, cuando fuertes patrones de colonización empezaron a atender contra los pueblos y bosques del territorio, facilitados por la expansión de la industria maderera y apoyados por el gobierno, que veía en la región una “válvula de escape” para la fuerte desigualdad en el acceso a la tierra prevaleciente en el resto del país. El rápido deterioro de los bosques trajo mayor atención del Estado y de actores internacionales de conservación en los años noventa. Si bien la Reserva

Biosfera del Río Plátano (RBRP) de más de 800,000 hectáreas había sido creada una década antes, no fue hasta los años noventa que estos actores lograron establecer medidas de conservación más concretas a nivel territorial.

Esta situación ha creado una dinámica de conflicto entre los pueblos Miskitos, Pech, Garifunas y Tawankas, con los colonos migrantes, tanto empresarios como campesinos, que han impulsado la frontera agrícola y en muchas ocasiones han despojado a los pueblos indígenas de sus tierras. Los intereses de conservación han jugado un rol clave, buscando frenar la frontera agrícola con medidas que en muchos casos han atentado contra los derechos indíge-

nas, pero en otras ocasiones también han apoyado sus reivindicaciones. El resultado ha sido una compleja dinámica de conflicto y pugna constante sobre el uso y manejo de los recursos y territorios de La Mosquitia.

Esta conflictividad se ha intensificado y complejizado en años recientes con la llegada de una nueva serie de intereses. Esto incluye presiones relacionadas a las propuestas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), cuyo mecanismo ha sido objeto de interés de organizaciones de conservación, de la industria forestal, de empresarios de bienes raíces, así como del Estado. Como esta iniciativa propone un cambio en la lógica del manejo de los recursos, podría presentar una considerable amenaza para los derechos y la seguridad alimentaria de los pueblos en La Mosquitia.

Además de REDD, las actividades extractivistas incluyen la construcción de la presa Patuca III, un proyecto hidroeléctrico de 104 MW y la reactivación de interés en la explotación de petróleo en la Costa de la Mosquitia. Ambas iniciativas presentan amenazas a las comunidades, que podrían derivar en desalojos y en la restricción de acceso a recursos y tierras críticas para los medios de vida y culturas locales. Los poderes fácticos también juegan un rol cada vez más importante, cuya influencia multiplica los retos de conflictividad y gobernanza en La Mosquitia.

En este contexto de conflicto y crisis sistemática, los pueblos indígenas de La Mosquitia constantemente han defendido sus territorios de presiones externas. Se destaca la experiencia de MASTA y las 11 federaciones de La Mosquitia aglutinadas en esta organización, cuyo objetivo es reivindicar y promover los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los retos principales de esta organización se relaciona con la falta de seguridad de tenencia y reconocimiento de los

derechos de los pueblos de La Mosquitia, pues la mayoría del territorio se considera patrimonio del Estado. Predominan traslapes, contradicciones e incertidumbre de la tenencia, y generalmente existe una gran brecha entre las normas oficiales y las prácticas de facto que se ejercen en relativa ausencia de agencias estatales. Si bien la Ley Forestal de 2007 incluye avances importantes reconociendo los derechos al territorio según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no hay una clara demarcación y titulación de estos territorios indígenas, por lo que sus derechos siguen siendo vulnerables.

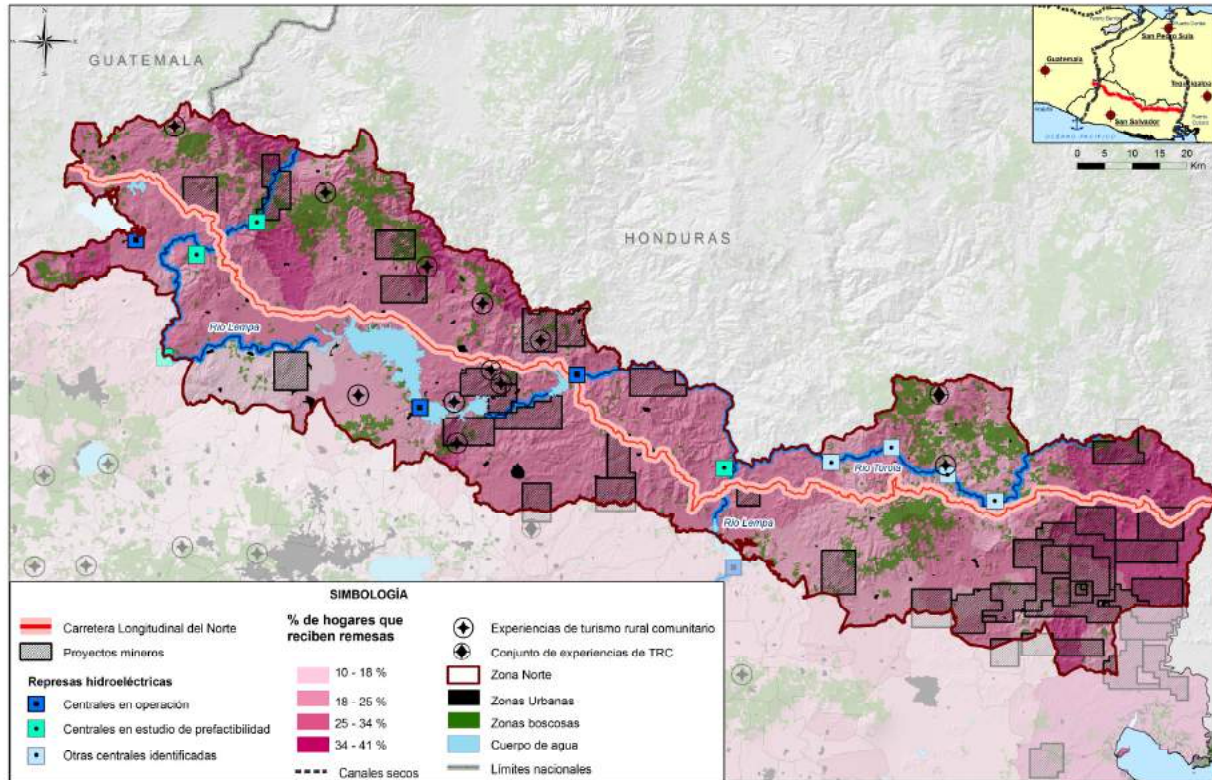
La inseguridad de derechos y tenencia ha obstaculizado una mayor resistencia coordinada y robusta frente al avance de la frontera agrícola. Un frente de deforestación se ha intensificado en parte occidental de La Mosquitia, extendiéndose por el sur hasta Nicaragua, además del surgimiento de nuevas dinámicas de deforestación dentro de la misma RBRP, que ha derivado en una solicitud de reincorporar este parque a la 'lista negra' de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). En meses recientes, se han reportado también dinámicas de especulación por parte de empresarios de bienes raíces que buscan beneficiarse de un eventual mecanismo de REDD, impulsando aún más el contexto de conflictos. La presencia del poder fáctico agudiza esta situación, pues nuevas relaciones de poder y redes económicas vinculadas con el narcotráfico debilitan a las organizaciones indígenas y el manejo tradicional de los recursos. Asimismo, grupos de narcotráfico se vinculan directamente a la expansión de ganadería, palma africana y pistas clandestinas en áreas forestales.

Las respuestas oficiales a esta situación conflictiva refleja la creciente importancia de esta región para el Estado, tanto por su valor energético, como por los intereses de conservación y de

REDD. Desafortunadamente, la gran parte de estas respuestas no apuntan hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, sino excluyente y militar. Esto se refleja no solamente en la ausencia de iniciativas serias hacia la seguridad de tenencia y fortalecimiento de derechos, sino también en la apuesta estatal de elevar el rol de las fuerzas armadas e impulsar una mayor presencia de éstas en el territorio. En abril de 2011 se declaró la instalación de una base militar en Patuca, Olancho, con el objetivo de proteger los proyectos hidroeléctricos en la zona, así como para conservar los recursos naturales. Este abordaje conservacionista de 'armas y cercas' es una tendencia preocupante en la región, pues apunta hacia rutas excluyentes y conflictivas con impactos directos para los actores locales.

Las federaciones de La Mosquitia y MASTA han buscado responder a esta situación con la defensa y reivindicación de sus derechos según el Convenio 169 de la OIT en varios niveles y foros, además de fortalecer sus instituciones y organizaciones para protegerse mejor de las presiones que prevalecen en La Mosquitia. Un eje de este esfuerzo es la participación de MASTA en la iniciativa del Reservorio Mesoamericano de Carbono Comunitario, que busca apoyar a las comunidades forestales y pueblos indígenas con soporte gradual y sostenido para construir una visión endógena de REDD a partir de los derechos, identidades y culturas de La Mosquitia.

La zona norte de El Salvador



Fuente: Elaborado por PRISMA en base a CND (2000); PNOBT (2004); MOP (2007); PNUD (2005); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM 2002

Históricamente la zona norte de El Salvador ha estado marginada de las políticas y programas de desarrollo del Estado, y más bien, ha jugado un papel de complemento económico subordinado a la Región Metropolitana de San Salvador. Desde inicios del siglo XX hasta mediados de los años setenta, la zona norte fue el principal proveedor de mano de obra que el sistema agroexportador demandaba. Los campesinos del norte del país trabajaban como jornaleros en los cultivos de exportación o migraban a Honduras en búsqueda de trabajo en los enclaves bananeros.

Durante los siglos XVIII y XIX, la zona norte de El Salvador fue importante para la producción de añil, el principal producto de exportación

hasta su caída a los finales del siglo XIX. Desde entonces durante buena parte del siglo XX, la zona norte se convirtió en un territorio proveedor de fuerza de trabajo para los cultivos de exportación en la franja central y costera del país, donde se concentraron los cultivos del café, algodón y caña de azúcar, en tanto que continuaban las migraciones hacia Honduras, no sólo en busca de empleo en las bananeras, sino también en busca de tierra.

Esta dinámica marcó al territorio hasta finales de la década de los años setenta cuando empieza un profundo y acelerado cambio económico que desplazó a la agroexportación tradicional como la fuente principal de divisas y empleo hacia una economía fuertemente dependiente

de las remesas. Este cambio no solamente significó el colapso de los empleos y salarios agrícolas en las cosechas de café, algodón y caña de azúcar, sino que también estuvo acompañado por la caída en los precios reales de los cultivos de subsistencia, dando paso al colapso de los medios de vida rurales. De hecho, actualmente el mercado laboral para cultivos de agroexportación es abastecido con mano de obra hondureña y nicaragüense, reflejando el fuerte impacto de las migraciones al exterior que se dio en las zonas rurales del país, incluyendo con mayor a la zona norte.

Con el colapso de los medios de vida rurales tradicionales, la migración y las remesas juegan un papel clave en los medios de vida en la zona norte. De hecho, en las zonas rurales ya predomina el empleo rural no agropecuario muy por encima del empleo agrícola. Esto es resultado de la expansión de diversas actividades económicas que van desde los servicios y el comercio, hasta opciones especulativas vinculadas con la construcción, todo lo cual se vincula directamente con la economía de las remesas. El galopante aumento de sectores como la telefonía celular y otros servicios de comunicación, la proliferación de sucursales bancarias y los servicios de transferencias de remesas, la construcción de viviendas en zonas rurales y los mercados inmobiliarios, así como el incremento de actividades ilícitas que incluyen el tráfico ilegal de personas ("coyotaje"), contrabando y narcotráfico, son sólo muestras de las diversas actividades que tienen lugar en la zona norte y en el resto del país.

En las últimas décadas la zona norte ha cobrado relevancia en el marco de los intentos por impulsar la industrialización y por las crecientes demandas derivadas del acelerado proceso de urbanización en la zona sur del país, proveyendo servicios estratégicos como energía hidroeléctrica y agua. Así fue como a inicios de los ochenta se construye la presa hidroeléctrica del

Cerrón Grande, la más importante del país, lo cual lejos de impulsar el desarrollo de la zona produjo desplazamientos de comunidades y la pérdida de importantes zonas de cultivo. Asimismo, por la identificación de minerales, la zona norte también es un territorio de conflictos asociados a propuestas para la extracción minera en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas.

Más recientemente, inversiones en infraestructura en la zona norte la están convirtiendo en un territorio clave para que El Salvador se constituya en el centro neurálgico de la Plataforma Logística Centroamericana, a partir de la construcción de la Carretera Longitudinal del Norte (CLN), un mega-proyecto clave para el desarrollo y expansión de servicios logísticos en la región. Como parte de esta visión, se concluyó la remodelación y modernización del Puerto de Cutuco, que a través de la CLN conectaría el flujo de mercaderías hacia Puerto Cortés en Honduras y Puerto Barrios en Guatemala.

A pesar de esfuerzos que datan de la década de los cincuenta, la construcción de la CLN solamente arrancó en 2007 con recursos de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés). La CLN forma parte de un programa más amplio de reducción de la pobreza denominado "Proyecto Zona Norte" orientado a mejorar la conectividad de la zona norte, fortalecer el desarrollo productivo y el desarrollo humano de la región. La estrategia productiva se fundamenta en el crecimiento económico e intenta mejorar la competitividad a través del incremento de la producción y el empleo. Sin embargo, el mayor peso económico del Proyecto se concentra en el componente de conectividad, cuyo objetivo principal es la carretera para incrementar el flujo de mercancías y servicios y la reducción de los costos de desplazamientos. La construcción de la CLN ha acentuado nuevas dinámicas y disputas territoriales. Una de

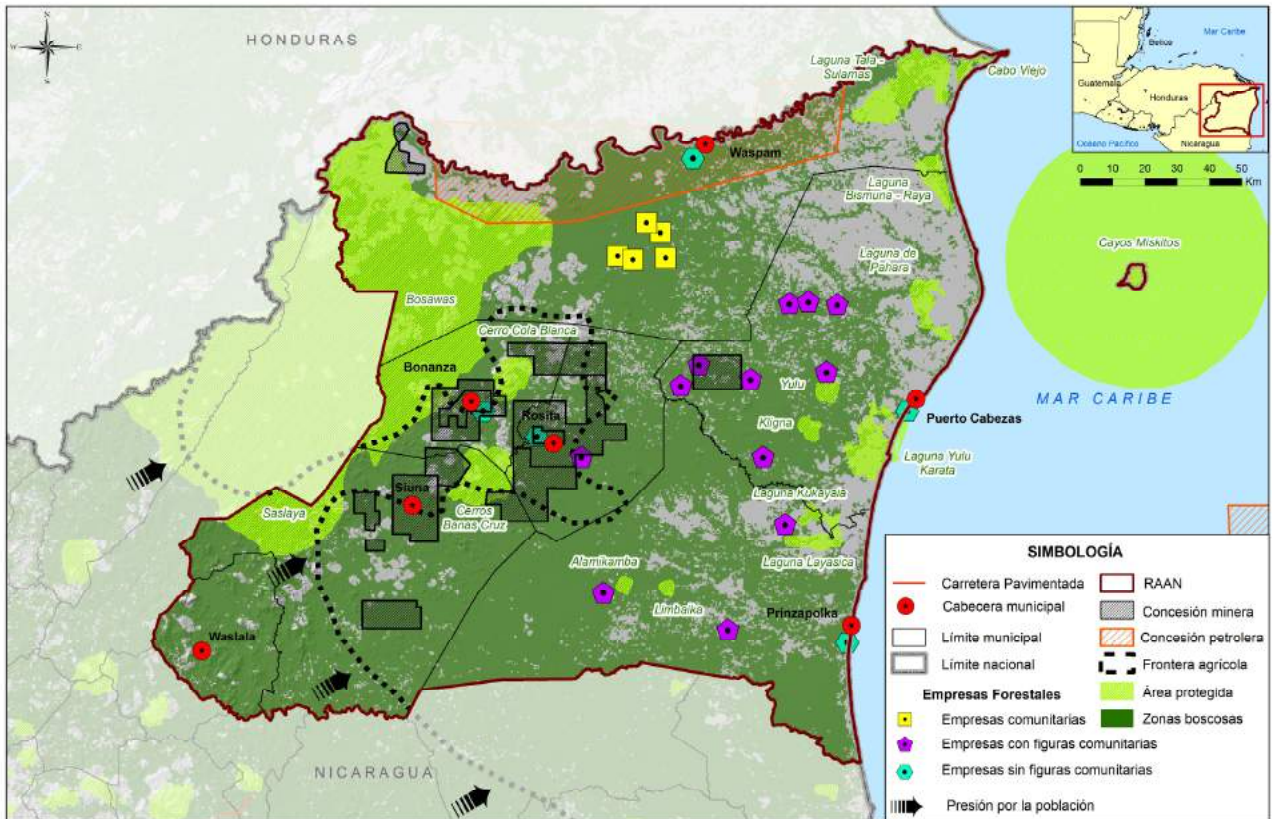
las dinámicas más significativas es la generación de un feroz mercado de tierras con pocas posibilidades de control, dado que El Salvador no cuenta con impuestos prediales. Esto deja por afuera el potencial de controlar el mercado y, más importante, imposibilita al Estado y a los gobiernos locales para captar la plusvalía del suelo que se ha incrementado por la construcción de la carretera. Al mismo tiempo, el mercado de tierras amenaza los derechos de acceso y uso de recursos importantes para los habitantes pobres de la zona, tal como el acceso a tierras fluctuantes en el embalse del Cerrón Grande que son críticos para diversos cultivos. El mercado de tierras está asociado a la construcción de la CLN, pero también refleja una nueva estrategia de captar los excedentes que se generan en la zona por el flujo de remesas.

Esta situación es particularmente preocupante, dado que es una de las zonas con mayores niveles de pobreza y migración en el país. La migración constituye una fuente de diferenciación social en las comunidades rurales y los lazos que los hogares rurales tienen con la tierra se están transformando. Las familias rurales con migrantes, tienen ahora menos lazos con la tierra, pues sus medios de vida se relacionan más con las actividades urbanas y con las remesas; mientras que las familias rurales sin migrantes tienen una mayor dependencia de la agricultura de subsistencia, sin embargo tienen menos acceso a la tierra. Las familias rurales pobres sin migrantes forman parte del núcleo más duro de pobres rurales, pues no pueden emigrar, ni diversificar sus estrategias de vida. Este conjunto de dinámicas que incluyen transformaciones económicas, migración, mega-proyectos como la CLN, etc., están provocando nuevas formas de diferenciación (familias con migrantes y sin migrantes; con acceso y sin acceso a viviendas, servicios básicos y recursos claves; con acceso a mercados de tierras y a trabajos no agrícolas, etc.

A pesar de este escenario adverso de debilitamiento del tejido social e institucional en la zona norte, existen interesantes y promisorios esfuerzos organizativos. Existen organismos de cuenca, movimientos de resistencia y reconocidas experiencias de asociatividad municipal, como las Mancomunidades y sobre todo, plataformas multiactores como el Comité Ambiental de Chalatenango (CACH), que promueve el desarrollo del territorio. Este último, resulta el medio idóneo de interlocución con actores externos para articular una visión colectiva del territorio y encauzar iniciativas externas, como los mega-proyectos, en una apuesta común que incorpore las necesidades de la población local y que contribuyan al desarrollo en ese territorio. La fuerte migración de la zona norte también ha dado paso al surgimiento de nuevas expresiones organizativas, como es el caso del Comité Gestor de Migración y Desarrollo de Nueva Concepción (COMIDEN), que con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, busca integrar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población del municipio de Nueva Concepción, a través de la capacitación y formación humana, el fomento de alternativas económicas, la concientización de los riesgos de migrar, además de buscar conservar y fortalecer el nexo con los migrantes de estas zonas que están en el exterior. El COMIDEM promueve que las iniciativas se vinculen con las remesas y que las contribuciones de comunidades de migrantes en el exterior se inviertan en acciones que canalicen proyectos de desarrollo dentro del territorio.

A pesar de estos esfuerzos organizativos, los desafíos en la zona norte son inmensos y todavía está por verse si dichos esfuerzos pueden movilizar y liderar estrategias alternativas de desarrollo con la suficiente celeridad para lidiar con los cambios que están ocurriendo en la zona norte. La expansión y profundización de actividades y actores ilícitos en ese territorio, complejizan aún más estos desafíos.

La Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua



Fuente: Elaborado por PRISMA en base a Gurdian y Mordt (2006); PNUD (2005); FUNICA, CRAAN-GRAAN, FORD (2010); Padilla (2009); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM 2002

La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) es un territorio caracterizado por fuertes presiones externas, que están configurando dinámicas socio-económicas, político-institucionales y ambientales en la actualidad. Si bien las exploraciones para la implementación de futuros proyectos extractivos (hidrocarburos, minería, palma africana, pesca, aprovechamiento forestal privado a gran escala) e hidroeléctricos representan apuestas de desarrollo diseñadas y promovidas a partir de intereses y actores ajenos al territorio, tienen el potencial de convertirse en mega-proyectos con claras implicacio-

nes sobre los derechos históricos adquiridos y sobre los medios de vida de las poblaciones locales. Estas presiones también coexisten con nuevos auges en el avance de la frontera agrícola y ganadera, así como con invasiones por parte de los colonos y mestizos que también se han convertido en amenazas para los pueblos y comunidades indígenas de la RAAN.

La llegada de personas desde diversos puntos del país – Estelí, Nueva Segovia y Matagalpa – ha implicado un crecimiento significativo de la población en la zona (septuplicada en el perío-

do 1950-1995), además de un choque entre las prácticas de las zonas Norte y Central con la cosmovisión, las costumbres y la lógica tradicional en la RAAN. Por su parte, el avance de la frontera agrícola y ganadera representa una fuente de conflicto permanente por el uso del suelo y el aprovechamiento de los recursos naturales. Por ejemplo, el municipio de Siuna se ha convertido en el más ganadero de la RAAN, lo que ha impulsado el aumento de la presión en el norte de la Reserva de Biosfera BOSAWAS, que incluso ya llegó a secar importantes afluentes hídricos.

Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua en 1987, se inició la institucionalización del régimen autonómico y el reconocimiento definitivo de los históricos reclamos territoriales de los pueblos del Caribe nicaragüense, fundamentados en la Constitución. A partir de ese momento varios hechos han permitido el avance y el fortalecimiento de la autonomía, entre los que se encuentran: a) la elección de los primeros concejos regionales (1990); b) la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y c) la aprobación de la Ley 445 (2002), la cual reconoce las formas de organización internas de las comunidades y sus respectivas autoridades, ratificando la propiedad comunal, a la vez que establece los mecanismos y porcentajes de ingresos fiscales que se deben recibir por el aprovechamiento de los recursos naturales.

Sin embargo, a pesar de estos avances aún persisten importantes obstáculos que afectan el régimen autonómico y se convierten en fuentes de conflicto. A pesar de que existen 12 territorios titulados, estos procesos no avanzan con la agilidad esperada, encontrándose 9 aún en la fase inicial y 5 en fase intermedia de titulación. Las limitaciones económicas, evidenciadas en la falta de equipos y materiales en las instancias responsables como la Comisión Nacional de

Demarcación y Titulación (CONADETI), la centralización en el Poder Ejecutivo, las diferentes interpretaciones de la Ley, el poco apoyo para superar las trabas y el no reconocimiento de ciertas autoridades comunales y territoriales son algunos de los factores que amenazan con debilitar las posibilidades de avance. Adicionalmente, al no recibir los certificados de nombramiento, se crean crisis de legalidad en las estructuras locales, al tiempo que se condicionan y limitan las respuestas frente a las presiones, dinámicas y proyectos provenientes del exterior.

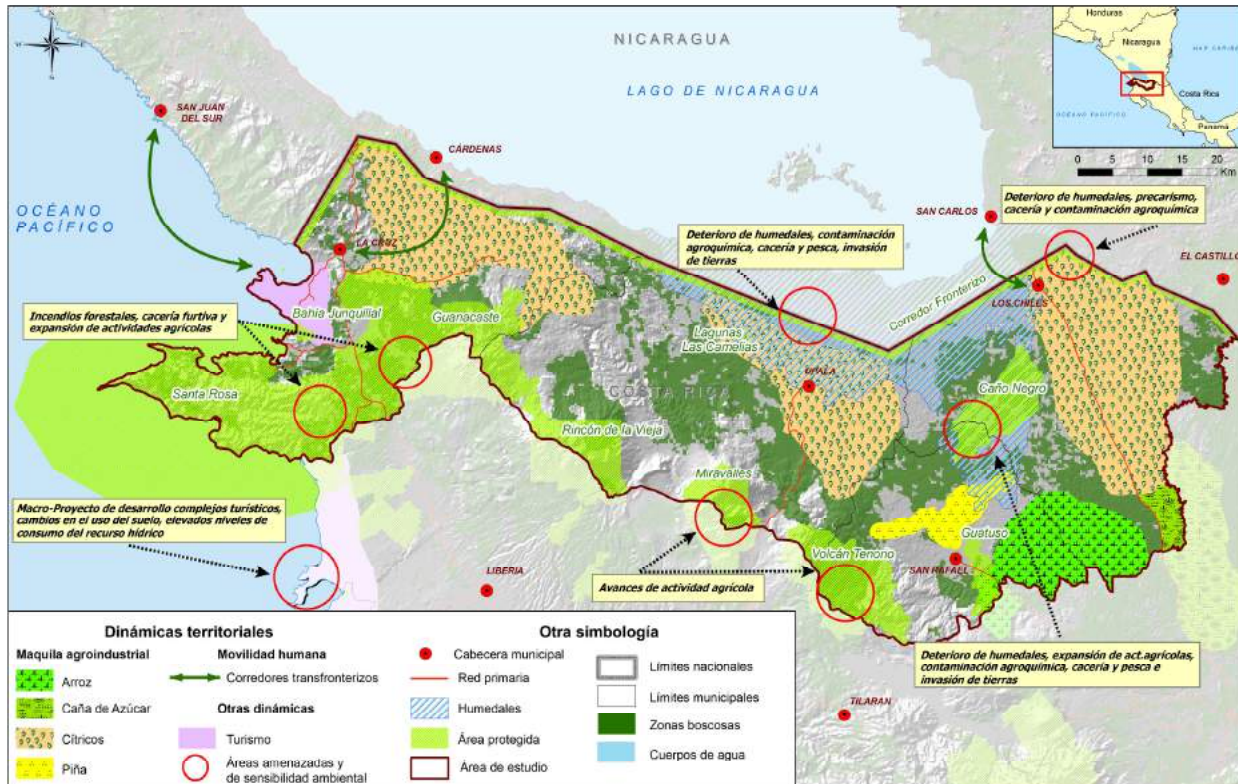
Entre los desafíos que enfrentan los territorios de la RAAN se encuentran la modernización de las instituciones autonómicas y la búsqueda de instrumentos y mecanismos que permitan financiar el desarrollo sostenible. Lo anterior implica trascender de una visión estrictamente política de la autonomía, para considerarla en un contexto más amplio (social, económico, cultural, ambiental). En este sentido, instrumentos con el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe del Alto Wangki-Bocay y espacios como NICARIBE 2020 representan oportunidades con potencial para contribuir a la sostenibilidad de los gobiernos territoriales. Mientras que el primero identifica cinco áreas estratégicas para impulsar iniciativas productivas (sector forestal, agroindustria y pesca, turismo, medioambiente e infraestructura), el segundo es una experiencia de diálogo y búsqueda de consenso sobre la visión estratégica y la gestión territorial de la Costa Caribe.

Una mirada a las perspectivas de futuro de la RAAN permite concluir que junto a la finalización de los procesos de seguridad jurídica (demarcación y titulación), garantizando el derecho a la tierra, el acceso a recursos y el fortalecimiento de los medios de vida a través de prácticas sostenibles, es necesario promover el empoderamiento de las autoridades y la participación efectiva de las comunidades en los

procesos de toma de decisiones sobre el uso y aprovechamiento de sus recursos. El establecimiento de sistemas de gobernanza territorial y el desarrollo de capacidades locales son factores clave para fortalecer la institucionalidad autónoma en sus diferentes niveles. Además de las organizaciones y autoridades - locales y regio-

nales - es preciso destacar el rol que desempeñan actores con presencia permanente en el territorio en la movilización de conocimiento, que impulsan procesos de construcción de capacidades alrededor de temáticas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, la participación política y la gestión territorial.

Norte de Costa Rica y sur de Nicaragua



Fuente: Elaborado por PRISMA en base a Miranda (2006); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM 2002

A pesar de las diferencias y tensiones entre Nicaragua y Costa Rica, ambos países comparten dinámicas que están reconfigurando el territorio fronterizo a partir de la manera en que se conjugan la movilidad humana de nicaragüenses atraídos por la expansión del turismo y la maquila agrícola en Costa Rica. A pesar que las condiciones de contratación son sumamente precarias, los trabajadores nicaragüenses buscan emplearse en las actividades del turismo y de la maquila agrícola que se expandió fuertemente durante las últimas décadas en el norte de Costa Rica.

Las migraciones laborales desde Nicaragua hacia Costa Rica se explican a partir de patro-

nes de acumulación basados en la proletarianización de la mano de obra, como elemento clave para viabilizar el desarrollo inmobiliario asociado al turismo y los cultivos de piña y naranja en Costa Rica.

Las grandes plantaciones orientadas al mercado externo bajo un esquema agroindustrial conocido como “maquila agrícola” en Los Chiles, Upala, Guatuso y la Cruz, no sólo basan su rentabilidad en un mercado laboral de condiciones precarias, sino también está teniendo severos impactos ambientales por el uso intensivo de agroquímicos, así como por los procesos de erosión, utilización y contaminación del agua. Este modelo de producción pone en peli-

gro áreas naturales y ecosistemas críticos como el Parque Nacional Santa Rosa y el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, que son claves para varios humedales. Este modelo de producción amenaza diversos ecosistemas, pues su extensión supone el cambio de uso de suelos y acentuando el problema de dragado de humedales y el incremento de incendios forestales.

En Guanacaste (Costa Rica) y en Rivas (Nicaragua), el auge del turismo ha dado paso a acelerados procesos de transformación de los usos de suelo, así como a procesos intensos y acelerados de especulación del mercado de tierras vinculado con el desarrollo turístico, aunque en los años recientes haya disminuido como resultado de la crisis económica y financiera mundial. Sin embargo, desde hace años, el avance de esta dinámica en los territorios ha generado tensiones y conflictos por el acceso a los recursos. La Confraternidad Guanacasteca ha liderado procesos de denuncia en contra de los abusos de inversionistas turísticos que además de degradar ecosistemas vulnerables, implementan esquemas de inversión completamente excluyentes, incluyendo la



Fuente: Elaborado por PRISMA en base a Román (2011); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM 2002

imposibilidad para que la población local mantenga el acceso a las playas, que por Ley son de acceso público, pero en la práctica terminan siendo privatizadas por la lógica de las inversiones turísticas e inmobiliarias.

Contrario a lo que puede pensarse, estas son dinámicas que resaltan la limitada capacidad del Estado costarricense para gestionar y regular estos procesos, que están teniendo severos impactos sociales y ambientales, incluyendo recursos tan críticos como el agua. A los esfuerzos de denuncia liderados desde la sociedad civil, también se suman los intentos desde municipalidades como la de Carrillo (Costa Rica) por elaborar un Plan de Desarrollo Humano Local, un Plan de Desarrollo Territorial y mejorar el sistema de catastro, por su importancia en el otorgamiento y regulación de permisos de construcción, y en la regulación del mercado de tierras.

San Juan del Sur en Nicaragua, es un territorio de expansión de la dinámica de inversiones en turismo y desarrollo inmobiliario originado en Guanacaste. Aunque constituye un proceso más reciente, reviste características similares a los impactos socio-ambientales agravados por procesos de despojo y desplazamiento de la población local en San Juan del Sur. La figura de los Gabinetes Ciudadanos es un ejercicio interesante de participación ciudadana, pero enfrentan la necesidad de obtener mayores recursos para funcionar. Una excepción interesante es el Gabinete de Turismo en la isla de Ometepe, donde hay una articulación importante de actores públicos y privados orientados a gestionar la actividad turística, incorporando preocupaciones sociales y ambientales.

En estos contextos, es clara la necesidad de un Estado más protagónico, más allá de limitarse a la promoción del turismo y a la construcción de obras de infraestructura para estimular la inversión privada y atraer inversión extranjera. Es clara la necesidad de un rol del Estado que implemente políticas públicas con una fuerte lógica territorial y con visión de sostenibilidad.

La presión derivada de la promoción y desarrollo de proyectos que poco se vinculan con las necesidades de los actores locales en los territorios son procesos cada vez más generalizados, constituyendo una nueva fuente de vulnerabilidad, que se magnifican si se consideran recurrentes impactos del cambio climático en territorios sumamente vulnerables, como las zonas costeras, ó la generalización de problemas como seguridad alimentaria y sus repercusiones en la agudización de los conflictos sociales.

En este marco, los nuevos patrones de movilidad y migraciones, como las que se dan entre Nicaragua y Costa Rica, denotan nuevos procesos de diferenciación y polarización social, que a su vez forman parte de procesos más complejos de disputa y conflictos por el control de recursos y del territorio. Estos son procesos que a mediano plazo denotan una clara tendencia de degradación y de negación de derechos laborales básicos para la población migrante. Paradójicamente, no resaltan esfuerzos organizativos que reivindiquen los derechos laborales y sociales de la población migrante nicaragüense, al menos en una escala social que se corresponda con la magnitud de los flujos migratorios que representan.

Implicaciones para la gobernanza y la gestión territorial

Los procesos de transformación en los territorios rurales de Centroamérica son profundos, acelerados, con implicaciones directas para las comunidades campesinas, indígena y afrodescendientes, pero también para las condiciones de gestión y gobernanza territorial.

A pesar de su manifestación generalizada, dinámicas territoriales trascendentales en Centroamérica parecieran estar sumamente desapercibidas y/o poco entendidas, a pesar de constituir fuentes de complejas disputas y conflictos por el control de los recursos y de servicios ecosistémicos relevantes.

Si bien existen respuestas relevantes por parte de actores locales-territoriales, en general adoptan marcos de políticas estatales que les apoyen frente a los diversos actores que disputan el control de recursos y del territorio que a menudo derivan en procesos de expulsión y despojo para las comunidades.

Las dinámicas territoriales replantean la necesidad de construir alternativas que contribuyan no sólo a garantizar los derechos y los medios de vida rurales, sino también a la construcción de condiciones que mejoren las perspectivas de gobernanza en los territorios rurales, que cada vez más están bajo la mirada de diversos actores externos, ya sea por el potencial de los recursos naturales y minerales, así como por la revaloración de diversos servicios ecosistémicos que son claves para el auge de actividades turísticas, para la comercialización de derechos de carbono, o para el flujo de mercancías y personas, tanto en condiciones lícitas, como ilícitas.

Dinámicas territoriales que se amplían y profundizan

En las últimas décadas, Centroamérica se transformó sustancialmente. Los patrones de ocupación del territorio correspondientes a las estrategias de agroexportación tradicional, ahora son parte de procesos más amplios en los cuales, vastos territorios rurales crecientemente son vistos como receptores de inversiones nacionales, regionales y transnacionales, pues constituyen un elemento fundamental para impulsar los acelerados procesos de diversificación y crecimiento económico en todos los países de la región.

La dinámica territorial derivada del auge del turismo y el desarrollo inmobiliario en Guanacaste, evidencian no sólo la celeridad de dichos procesos, sino también la continua necesidad de incorporar nuevos territorios al punto de agotar las posibilidades de convertir en suelo urbano extensos territorios rurales en Guanacaste y extenderse hacia el pacífico sur de Nicaragua, tal como ocurre en Tola y San Juan del Sur, municipios con un fuerte auge de desarrollo inmobiliario asociado con el turismo que ya puede extenderse en el territorio de Guanacaste. Al igual que el turismo y el desarrollo inmobiliario, que ya tiene expresiones importantes en otros territorios de Centroamérica, nuevas inversiones para la producción de agrocombustibles, como la palma africana y la caña de azúcar, están expandiéndose en Petén y la Franja Transversal del Norte de Guatemala, y en territorios hondureños y existen propuestas de inversionistas privados para el cultivo de agrocombustibles en Nicaragua y El Salvador. Tam-

bién coexisten en varios territorios fuertes intereses por ampliar industrias extractivistas, tal como ocurre con la minería y el petróleo en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Dinámicas territoriales como fuentes de nuevos conflictos y disputas

Las dinámicas territoriales suponen nuevos conflictos y disputas. En la medida que nuevas visiones y apuestas estratégicas externas a los territorios se despliegan a lo ancho y largo de Centroamérica, nuevos contextos y nuevos actores están determinando las opciones de *qué hacer* en los diversos territorios rurales, pues recursos tradicionales como la tierra, ahora son apetecidos para el despliegue de enormes inversiones que incluyen la tierra, diversos recursos naturales y minerales, así como servicios ecosistémicos específicos.

Crecientemente los territorios indígenas y las tierras en manos de comunidades campesinas, están bajo la mirada de actores económicos nacionales, regionales y transnacionales para el desarrollo de proyectos diversos en zonas rurales. Los procesos de regularización, así como los mercados de tierra han pasado a ser instrumentos claves para posibilitar el acceso de inversionistas a importantes extensiones de tierra para la implementación de inversiones en zonas que antes eran dedicadas a la producción campesina, tal como ocurrió con importantes zonas de turismo y desarrollo inmobiliario en Guanacaste, Tola y San Juan del Sur. Incluso, a menudo, estrategias extra-legales se utilizan para despojar de la tierra a comunidades campesinas, sobre todo cuando la situación de derechos de propiedad sobre la tierra es precaria. Aunque los territorios bajo control de pueblos indígenas tienen una relativa mayor seguridad de la propiedad, mega-proyectos diversos impulsados por el Estado, a menudo representan disputas que debilitan sus derechos, tal como sucede en La Mosquitia hondureña.

Cabe mencionar que procesos importantes de fortalecimiento de derechos también existen en algunos territorios, como en la RAAN, donde se implementa un proceso de titulación de territorios que tradicionalmente han sido reclamados por pueblos indígenas en BOSAWAS. Estos procesos de formalización de derechos también coexisten con un creciente interés de actores diversos por aprovechar el potencial de recursos madereros, mineros y petroleros, entre otros.

Respuestas de los actores locales ante las dinámicas territoriales

En la medida que las dinámicas territoriales amenazan los derechos, los medios de vida de los actores locales-territoriales, así como sus cosmovisiones y tradiciones culturales, sus respuestas obedecen a una lógica de defensa y resistencia.

Las capacidades de organización, de movilización y las estrategias de incidencia son sumamente críticas para la defensa de derechos, pero también las condiciones y capacidades de negociación, ya sea para la búsqueda de modalidades favorables de inserción en ciertas oportunidades derivadas de las dinámicas territoriales, o bien, para la construcción de opciones innovadoras que no significan ni la resistencia, ni la inserción incondicional a las dinámicas territoriales.

El turismo rural comunitario representa una respuesta innovadora que crecientemente es asumida por diversas comunidades en territorios rurales, aunque su escala y los marcos institucionales de fomento y apoyo todavía distan mucho de los incentivos y alcances propiciados por los gobiernos de los países de la región.

La iniciativa del Reservorio Mesoamericano de Carbono Comunitario propuesta por la Alianza de Pueblos y Bosques, representa una respuesta

innovadora, no sólo porque significa la escala territorial más importante en la región, sino también porque introduce la situación de derechos, los medios de vida y la gobernanza como los temas críticos que pueden ser fortalecidos a partir de una inserción alternativa a esquemas de reducción de emisiones por deforestación y degradación, asunto que ha demostrado un gran interés de diversos actores en Centroamérica, incluyendo gobiernos, sector privado, organizaciones de conservación, cooperantes y entidades académicas, entre otros.

Ausencia de alternativas que redimensionen el desarrollo en los territorios rurales

Con excepción de propuestas innovadoras como el turismo rural comunitario y el reservorio de carbono comunitario, las dinámicas territoriales emergen en ausencia de otras propuestas alternativas capaces de sobreponerse a las estrategias e inversiones impulsadas por el Estado y los actores económicos. Los procesos de descentralización a menudo también refuerzan la ejecución de inversiones en mega-proyectos públicos y privados, sobre todo en la medida que significan algunos ingresos adicionales, tal como ocurre con las explotaciones petroleras en Guatemala.

A pesar que las migraciones han pasado a ser procesos sumamente relevantes para comunidades rurales como en la zona norte de El Salvador, esfuerzos colectivos que incorporen dicho fenómeno a las estrategias comunitarias son particularmente escasos. Excepciones como la de Nueva Concepción en Chalatenango revisitan una importancia a escala local, sin embargo, no parecen surgir propuestas que vinculen estratégicamente la migración con los esfuerzos relevantes de gestión territorial y manejo de recursos naturales que realizan grupos comunitarios en territorios rurales. La migración de nicaragüenses hacia Costa Rica para emplearse

en la maquila agrícola, en el turismo y la construcción originada por el desarrollo inmobiliario es particularmente sugerente, sobre todo si se considera que ante la generalizada negación de derechos laborales de los nicaragüenses, éstos adolecen de esfuerzos organizativos para reivindicarlos.

Finalmente, las migraciones también son fuente de nuevos procesos de diferenciación y segregación social. En la zona norte de El Salvador, es clara y generalizada la diferenciación social surgida entre familias con migrantes y sin migrantes, incluso, las remesas están impulsando nuevos procesos de segregación territorial, pues la urbanización de territorios rurales en gran medida se explican por el papel de los migrantes y las remesas que dan paso a procesos inéditos de cambio en el uso del suelo promovidos por las familias con migrantes y con remesas.

Implicaciones para la gobernanza y la gestión territorial

Centroamérica se está reconfigurando territorialmente. Las dinámicas territoriales implican procesos agresivos de transformación de los usos del suelo. También implican nuevos procesos de degradación ambiental que en general sobrepasan las capacidades de gestión y regulación de la institucionalidad pública, incluso en Costa Rica, que cuenta con mayores capacidades institucionales. Junto a los impactos ambientales, las implicaciones sociales y los impactos sobre los medios de vida de las comunidades rurales forman parte de los nuevos contextos territoriales rurales en Centroamérica.

La reconfiguración territorial refleja la reconfiguración de los actores que están determinando las visiones y las estrategias implementadas en los territorios, actores que no sólo incluyen a los gobiernos, sectores empresariales (nacionales, regionales y transnacionales), u organizaciones de conservación, sino que también incluyen

actores vinculados con actividades ilícitas. Esta complejidad de intereses y actores con presencia cada vez más fuerte en los territorios rurales están replanteando los desafíos de la gobernanza territorial. Los megaproyectos de infraestructura que forman parte de la plataforma logística centroamericana no sólo están dinamizando los mercados de tierras, que por sí mismos tienen implicaciones directas sobre los derechos de las comunidades locales, sino que además están contribuyendo a profundizar nuevas presiones sobre el aprovechamiento de las “ventajas y potencialidades” de los territorios rurales.

Si se consideran los recurrentes y cada vez más severos impactos del cambio climático para comunidades en los territorios rurales de Centroamérica, los desafíos para la gobernanza territorial suponen la necesidad de nuevas visiones no sólo más sensatas, sino, sobre todo, más incluyentes, lo que a su vez, supone la

construcción de estrategias que consideren el rol ambiental de los territorios rurales para las inminentes estrategias de adaptación hacia las cuales se requiere avanzar en la región.

Desde la perspectiva de adaptación al cambio climático, los territorios rurales tienen un rol sumamente clave y estratégico, pero también desde una lógica de mitigación y reducción de riesgos no sólo para los territorios rurales mismos, sino también para los territorios urbanos. Por todo lo anterior, las dinámicas territoriales y las perspectivas del cambio climático obligan a replantear el rol estratégico de los territorios rurales y de sus actores, lo cual podría ser un elemento fundamental para la construcción de condiciones más favorables de gobernanza y desarrollo, no sólo desde la perspectiva socio-económica y ambiental, sino incluso, desde una perspectiva de seguridad.

Bibliografía

Miranda, Byron (2006, mayo). *Dinámicas territoriales en la zona norte de Costa Rica*. En Fundación PRISMA (coordinador). Taller metodológico sobre dinámicas territoriales en Centroamérica. Simposio realizado en Costa del Sol, El Salvador. Disponible en <http://www.prisma.org.sv>

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGESPLAN. (2011). *Plan de Desarrollo Integral de la Franja Norte*. Guatemala. Disponible en <http://www.segeplan.gob.gt/>

FUNDALACHUÁ (2010). *The forest dialogue*. Disponible en <http://environment.yale.edu/tfd/dialogue/forests-andclimate/third-redd-readiness-field-dialogue>

Bendless, Delbert (2009, mayo). *Crisis global y dinámicas territoriales en Centroamérica: implicaciones para la construcción de alternativas*. En Fundación PRISMA (coordinador). Simposio realizado en San Salvador, El Salvador. Disponible en <http://www.prisma.org.sv>

MOPAWI (2005). *Memoria anual de labores 2005* Disponible en <http://www.mopawi.org>

Cortavé, Marcedonio (2009, noviembre). *Dialogo mesoamericano. Reducción de emisiones por deforestación y degradación: implicaciones para comunidades forestales*. En Fundación PRISMA (coordinador). Simposio realizado en San Salvador, El Salvador. Disponible en <http://www.prisma.org.sv>

Monterroso, Iliana (2007, noviembre). *Desafíos y potencialidades del turismo comunitario en Centroamérica*. En Fundación PRISMA (coordinador). Taller de Intercambio. Simposio realizado en Petén, Guatemala. Disponible en <http://www.prisma.org.sv>

Gurdián, Galio (2006, mayo). *Dinámicas territoriales en la zona norte de Costa Rica*. En Fundación PRISMA (coordinador). Taller metodológico sobre dinámicas territoriales en Centroamérica. Simposio realizado en Costa del Sol, El Salvador. Disponible en <http://www.prisma.org.sv>



prisma@prisma.org.sv www.prisma.org.sv
3a. Calle Poniente No. 3760, Col. Escalón, San Salvador
Tels.: (503) 2298 6852, (503) 2298 6853, (503)2224 3700 y Fax: (503) 22237209